El siguiente es el documento presentado por la Magistrada Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.

Providencia: Sentencia – 1ª instancia –19 de septiembre de 2018

Proceso: Acción de Tutela –

Radicación Nro. : 66001-22-13-000-2018-00686-00

 66001-22-13-000-2018-00687-00

 66001-22-13-000-2018-00727-00

Accionante: Javier Elías Arias Idárraga

Accionado: Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira,

Magistrado Ponente: Claudia María Arcila Ríos

**Temas: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / SUBSIDIARIEDAD / ACCIONANTE NO HA PRESENTADO SOLICITUD –MORA JUDICIAL- EN EL PROCESO ORDINARIO / IMPROCEDENCIA**

De las copias allegadas de los expedientes que contienen las acciones popular objeto del amparo[[1]](#footnote-1), se puede concluir que en este caso se encuentra ausente el presupuesto de subsidiaridad que caracteriza la tutela, pues el accionante no ha elevado solicitud alguna para obtener se tramite la actuación de conformidad con los términos previstos en la Ley 472 de 1998, y por tanto, el despacho accionado tampoco ha tenido la oportunidad de resolver lo que corresponda.

Ese pasivo comportamiento impide otorgar la tutela reclamada, porque el juez constitucional no puede desconocer las formas propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios competentes para ello.

En consecuencia, el amparo reclamado resulta improcedente por incumplir el requisito de la subsidiariedad.

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL**

**SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA**

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos

 Pereira, septiembre diecinueve (19) de dos mil dieciocho (2018)

 Acta No. 357 del 19 de septiembre de 2018

 Expedientes Nos. 66001-22-13-000-2018-00686-00

 66001-22-13-000-2018-00687-00

 66001-22-13-000-2018-00727-00

Se deciden en primera instancia las acciones de tutela de la referencia, promovidas por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la Alcaldía de Pereira, el Procurador y el Defensor del Pueblo, ambos de la Regional Risaralda.

**A N T E C E D E N T E S**

1. Relató el actor que en las acciones populares radicadas bajo los números “2018-772”, “2018-770” y “2018-774”, que formuló, el juzgado accionado incumple los términos para admitirlas y nunca aplica los artículos 5º y 84 de la Ley 472 de 1998.

2. Considera lesionados los derechos a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. Para su protección solicita: a) a la funcionaria accionada aplicar las citadas normas, así como el artículo 42 del Código General del Proceso; b) al Consejo Seccional de la Judicatura aportar copia de todas las vigilancias judiciales y administrativas que ha presentado y c) aclarar si el Código General del Proceso aplica en acciones populares, a pesar de existir normativa específica y si “la tutela donde pido aplicar art 5 (sic) ley 472 de 1998 nunca se ordena aplicar art 5 (sic), entonces que (sic) función tiene la tutela”.

**ACTUACIÓN PROCESAL**

1. Mediante proveído del pasado 6 de septiembre se admitieron, en trámite acumulado, las acciones de tutela y se ordenó vincular al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la Alcaldía de Pereira, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, ambos de la Regional Risaralda. No se ordenó hacerlo respecto de las entidades accionadas en los procesos en los que encuentra el actor vulnerados sus derechos, porque no han concurrido a esas actuaciones.

2.1 El Procurador Regional de Risaralda dijo que a esa Agencia del Ministerio Público se han comunicado los autos que admiten las respectivas acciones populares y como consecuencia de ello han designado a los diferentes profesionales de la Procuraduría Regional Risaralda y Provincial de Pereira para dar cumplimiento al artículo 21 de la ley 472 de 1998; el Ministerio Público es ajeno a la cuestión planteada por el demandante, pues su intervención está orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, lo que hará en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba. Solicita se le desvincule de la actuación.

2.2 Los Magistrados que componen el Consejo Seccional de la Judicatura señalaron que ante esa Corporación, el accionante no ha radicado solicitud alguna de vigilancia judicial administrativa, sobre las acciones populares objeto de la tutela. Solicitaron su desvinculación.

2.3 El Alcalde del Municipio de Pereira, por medio de apoderada, alegó que es ajeno a la actuación desplegada en el Juzgado accionado y propuso como excepción la de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4 La titular del juzgado accionado refirió que las demandas populares fueron rechazadas por competencia mediante proveídos del 10 y 11 de septiembre pasado y que frente a estas decisiones ningún recurso se instauró.

3. La Defensoría del Pueblo guardó silencio.

**C O N S I D E R A C I O N E S**

1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y sumario, la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.

2. El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si procede la acción de tutela para ordenar al juzgado accionado cumplir los términos procesales establecidos por la ley, para admitir las demandas populares instauradas por el actor. De serlo, se establecerá si se han lesionado derechos fundamentales del accionante, que sean menester proteger.

3. Como se ha reiterado por la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos de procedencia del amparo constitucional es que el interesado haya acudido de manera previa a la autoridad que supuestamente afecta sus garantías fundamentales, a fin de que esta tenga la oportunidad de conocer la reclamación y pronunciarse al respecto; de obviarse ese trámite, se estaría dando por sentado que la administración no va a acceder a la petición y adicionalmente, el ciudadano ejercería la tutela como forma principal de obtener protección a sus derechos, cuando, es sabido, una de sus principales características es la subsidiariedad.

Al respecto, en un caso en el cual también se debatía la configuración de una mora judicial, la Corte Constitucional[[2]](#footnote-2), dijo:

*“3.4.2.2. Ahora bien, en lo que se refiere a las hipótesis de mora o de tardanza en el cumplimiento de los términos judiciales, esta Corporación ha tenido la ocasión de pronunciarse en varias oportunidades, en el sentido de señalar que la acción de amparo constitucional procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o en caso de que exista, se acredite por parte del accionante su falta de idoneidad[[3]](#footnote-3) o la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. Precisamente, en la Sentencia T-527 de 2009 se dijo que: “Así, se ha puntualizado que la acción de tutela no procede de plano por la inobservancia de los términos dentro de un proceso, pues además de demostrarse que el demandante no cuenta con otro medio de defensa eficaz, debe acreditarse que la demora es consecuencia directa de la falta de diligencia de la autoridad pública.”[[4]](#footnote-4)*

*En el mismo sentido, en la Sentencia T-1249 de 2004, al recapitular varias providencias sobre la materia, se sostuvo que: “(…) la Corte indicó que de los postulados constitucionales se sigue el deber de todas las autoridades públicas de adelantar actuaciones y resolver de manera diligente y oportuna los asuntos sometidos a ella. En ese sentido, la dilación injustificada y la inobservancia de los términos judiciales pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este caso, señaló la Sala, si el ciudadano no cuenta con un medio de defensa eficaz a su alcance, y está frente a la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, la acción de tutela es procedente para proteger sus derechos fundamentales”[[5]](#footnote-5).*

*…*

*3.4.2.3. En todo caso, con el ánimo de preservar el carácter residual de la acción de amparo constitucional, la Corte también ha dicho que la procedibilidad de la tutela en los casos de mora judicial, exige que la persona afectada haya elevado una petición o solicitud al funcionario o despacho accionado, en la que pida la pronta resolución de su pretensión[[6]](#footnote-6)…*

4. De las copias allegadas de los expedientes que contienen las acciones popular objeto del amparo[[7]](#footnote-7), se puede concluir que en este caso se encuentra ausente el presupuesto de subsidiaridad que caracteriza la tutela, pues el accionante no ha elevado solicitud alguna para obtener se tramite la actuación de conformidad con los términos previstos en la Ley 472 de 1998, y por tanto, el despacho accionado tampoco ha tenido la oportunidad de resolver lo que corresponda.

Ese pasivo comportamiento impide otorgar la tutela reclamada, porque el juez constitucional no puede desconocer las formas propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios competentes para ello.

En consecuencia, el amparo reclamado resulta improcedente por incumplir el requisito de la subsidiariedad.

5. De todas formas, ninguna decisión de fondo se podría proferir en este caso, ya que tal como lo demuestran las pruebas documentales aportadas, las demandas populares fueron rechazadas por competencia mediante proveídos del 10 y 11 de septiembre de este año[[8]](#footnote-8); es decir, ya se resolvió sobre su admisibilidad, con lo que se satisfizo la pretensión principal del accionante.

6. Las peticiones dirigidas a obtener se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura incorporar copia de todas las vigilancias judiciales y administrativas que ha presentado y establecer, por esta Sala, si el Código General del Proceso es aplicable en acciones populares y se aclare la finalidad de la acción de tutela, también resultan improcedentes, ya que este medio constitucional fue concebido para proteger derechos concretos y no para elevar esa clase de solicitudes.

Además, de conformidad con lo informado por el Consejo Seccional de la Judicatura el accionante no ha elevado solicitud alguna tendiente a obtener vigilancia administrativa en los procesos en el que encuentra vulnerados sus derechos.

7. Como lo solicita el demandante, se autorizará expedir a su costa copia de todo lo actuado en este proceso.

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de

Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**R E S U E L V E**

**PRIMERO:** Se declaran improcedentes las acciones de tutela propuestas por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la Alcaldía de Pereira, el Procurador y el Defensor del Pueblo, ambos de la Regional Risaralda.

**SEGUNDO.** Expídase al accionante copia de todo lo actuado en este proceso, a su costa.

**TERCERO.** Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**CUARTO.** De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase,

Los Magistrados,

 **CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS**

 **DUBERNEY GRISALES HERRERA**

 **EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS**

1. Folios 29 a 42 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia T-230 de 2013, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez [↑](#footnote-ref-2)
3. En la sentencia T-527 de 2009, se reconoció que a pesar de que el accionante tenía la posibilidad de solicitar la recusación de la autoridad judicial que había dejado vencer los términos para proferir sentencia en el desarrollo de un proceso penal, dicha alternativa procesal no era idónea frente al problema de mora judicial planteado por el demandante. [↑](#footnote-ref-3)
4. Subrayado y sombreado por fuera del texto original. Recientemente, con el propósito de combatir la mora judicial, el artículo 9° de la Ley 1395 de 2010 adicionó un nuevo parágrafo al artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, referente a los términos para dictar resoluciones judiciales, con el siguiente tenor literal: “(…) En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal. [↑](#footnote-ref-4)
5. En este caso se citó la Sentencia T-1154 de 2004. Subrayado y sombrado por fuera del texto original. Más adelante reiteró que: “En la sentencia T-258 de 2004, la Corte señaló que prima facie, dada la subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, no puede el Juez constitucional inmiscuirse en el trámite de un proceso adoptando decisiones o modificando las ya existentes en el curso del mismo. Lo anterior vulneraría, de conformidad con el fallo, los principios de autonomía e independencia de las funciones consagradas en los artículos 228 y 230 superiores. No obstante lo anterior, indicó la providencia que es procedente la solicitud de amparo cuando la demora en la resolución del caso no tiene justificación, el peticionario no cuenta con otro medio de defensa eficaz y, además, el mismo está ante la inminencia de un perjuicio irremediable. Concluyó entonces la Sala que la acción de tutela no procede automáticamente ante el incumplimiento de los plazos legales por parte de los funcionarios, sino que debe acreditarse también que tal demora es consecuencia directa de la falta de diligencia de la autoridad pública.” [↑](#footnote-ref-5)
6. Sentencia T-527 de 2009. [↑](#footnote-ref-6)
7. Folios 29 a 42 [↑](#footnote-ref-7)
8. Folio 30 a 32, 35 a 37 y 40 a 42 [↑](#footnote-ref-8)